

Tras el rechazo de la Reforma Tributaria del gobierno

¿Cortar gasto público para recaudar más? El debate que reabrió Felipe Larraín

Muchas veces, los parlamentarios son la piedra de tope para lograrlo, dicen exautoridades que lo consideran poco realista.

Equipo Economía

Existe consenso entre los expertos de que el Estado requiere recursos para financiar mejoras sociales y apoyar la consolidación fiscal. Incluso la OCDE lo señala (ver nota secundaria). Sin embargo, el rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria del Gobierno, que buscaba recaudar 3,6 puntos del PIB, fue una negativa a la estrategia del Gobierno para lograr esto, y puso en duda de dónde sacar tales recursos.

La oposición parlamentaria, que rechazó en masa la reforma en la Cámara de Diputados ayer, plantea que para su objetivo de recaudación el Gobierno debe centrarse en un par de ideas, como las medidas para la lucha contra la evasión y la elusión y el royalty minero (ver nota aparte). Algunos congresistas de hecho plantean que tales dineros podrían provenir de nuevas licitaciones de concesiones mineras para la explotación del litio, tras el importante aporte de las productoras SQM y Albermarle del año pasado.

A la discusión esta mañana se sumó el exministro de Hacienda de la administración Piñera, Felipe Larraín, quien planteó que existen otras maneras de recaudar. Asume que el royalty minero se podría aprobar y que también podría salir adelante el eventual proyecto de impuestos correctivos —que aún no se presenta y que incluiría tributos verdes como al combustible de aviones (ver página 11)—, lo que sumaría en torno a 1 punto del PIB. Pero además, sostiene el Gobierno podría hacer "un esfuerzo importante por mejorar en forma sostenida la calidad del gasto público" de programas sociales y compras públicas y podría obtener 1,1 puntos más. Con estos 2 puntos, el Ejecutivo podría financiar el aumento de la PGU (1,3 puntos) y el proyecto de sala cuna universal.

Sus cálculos fueron bien recibidos entre economistas de diferentes sensibilidades, sin embargo todos coinciden que la implementación es muy compleja principalmente por la oposición de parlamentarios.

Larraín comenta a La Segunda que en los números es posible, sin embargo reconoce que es una tarea compleja.

"Nunca es fácil. Hay que enfrentar los



Felipe Larraín, exministro de Hacienda.

"Esto choca con la realidad política cuando se llega al Congreso", **Juan José Obach**, exjefe de gabinete Hacienda.



"Los programas tienen razón de ser y muchas veces lo que se necesita es modificarlos", **Andrea Repetto**, Académica UAI.



grupos de presión afectados, otros gastos administrativos son más fáciles de cortar, como viajes, autos, gastos de oficina", relata el economista, quien puntualiza que "todo suma".

Experiencia en la Concertación

En la centro izquierda, miran con atención las cifras de Larraín, sin embargo sostienen que "solo resisten el papel", ya que en los gobiernos de la Concertación, ex directores de presupuesto (Dipres) intentaron realizar ajustes, pero se encontraron con una "muralla política", cuenta el encargado de esta entidad en los gobiernos de Michelle Bachelet, Sergio Granados.

"Felipe entrega un festival de cifras. El fue dos veces Ministro de Hacienda, el ambas oportunidades intentó reducir los gastos, pero no logró rebajar ningún programa, pero por mi experiencia puedo decir que es muy complejo", comenta Granados.

El economista relata que siempre los ítems más grandes en los presupuestos que se pueden "recortar" son los "gastos en bienes y servicios de consumo". El 75% de este gasto está en cuatro ministerios, Salud, Educación, Policías y Defensa. Sin embargo, el experto dice que siempre que un gobierno intenta disminuirlos termina restituyéndolos por presión de los mismos mi-

nuevas. Pero mirando hacia atrás, concluye que "ningún gobierno en democracia, ni de derecha ni de izquierda, ha cerrado programas y hay buenos motivos para no hacerlo".

"Primero, porque los programas tienen razón de ser y muchas veces lo que se necesita es modificarlos y no cerrarlos. Ello podría incluso requerir dedicarles más recursos. Segundo, porque la metodología para evaluar programas es limitada y tiene falencias" y tercero por los costos políticos asociados.

Durante las administraciones de los exministros, Alberto Arenas y Rodrigo Valdés, también hubo experiencias similares. El entonces, jefe de asesores de Teatino 120, Enrique Paris apunta a que políticamente puede ser difícil eliminar un programa.

"Uno ve programas que tienen 10 o 20 años, con gente que puede haber hecho toda su carrera en ese programa, lo que comienza a generar intereses en las personas que trabajan ahí y hace más difícil eliminarlo", comenta Paris.

"Esto pasa bastante en programas de seguridad pública, donde a pesar de que algunos programas no son totalmente eficientes, es difícil que un parlamentario dé su voto para eliminarlo y quedar como que votó para que seguridad pública tenga menos recursos", reflexiona el hoy decano Facultad Economía y Negocios Universidad Santo Tomás.

El muro que frenó a la derecha

El director ejecutivo de Horizontal y exjefe de gabinete de Hacienda, durante la administración de Ignacio Briones, Juan José Obach, coincide en los cálculos de Larraín, sin embargo reconocer que más allá del excel, generar recortes tiene una serie de complejidades. La principal es una política social muy fragmentada y poco coordinada entre sí.

"Tenemos más de 700 programas en todos los ministerios. Y de estos 700 programas, 350 son de menos de 3 millones de dólares, cada uno estos programas tiene beneficiarios, tiene grupos de interés, tiene un parlamentario en la zona que lo defiende", explica el economista, quien coincide que al llevar la propuesta al Parlamento, comienzan los problemas.

"Esto choca con la realidad política cuando se llega al Congreso, para tratar de modificar estos programas, eliminar, fusionar y movilizar recursos", comenta Obach, quien agrega que el Presidente puede lograr una mayor eficiencia en el gasto, "pero para eso debe utilizar su liderazgo en su sector político".

nisterios.

En cuando a reducir programas, Granados sostiene que "es casi imposible reducirlos porque las bancadas del parlamento es difícil lograr su aprobación. Hay presiones transversales de parlamentarios para reponer programas. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero hay que hacerlo quirúrgicamente, más aún ahora con la fragmentación que tiene el Congreso y donde hay gran clientelismo", apunta Granados.

Las tres razones de Repetto

Andrea Repetto, académica UAI y directora de Espacio Público expone que en la derecha suele repetirse la idea de que se puede cerrar programas mal evaluados y reasignar recursos para financiar políticas

La microreforma que aprobaría la oposición

Entre los senadores de la UDI y Evópoli hay consenso: no aprobarán la reforma tributaria si llega a la Cámara Alta. RN ya hizo público su rechazo ayer.

En cambio, varios darían su voto favorable a un proyecto de ley separado que solo vaya a atacar la evasión y elusión de impuestos. A ello se podría agregar el royalty, ya consensuado.

En esa postura están los RN **Rafael Prohens**, quien lo aprobaría "sin ningún problema"; **José García**, "consideramos que esas son prácticas desleales que afectan el desarrollo de la economía social de mercado"; y **Rodrigo Galilea**, que incluiría normas para mejorar el funcionamiento de Aduanas y fortalecería la Unidad de Análisis Financiero para el control del lavado de dinero.

"De todas maneras lo aprobaría", dice el senador UDI **Gustavo Sanhueza**.

Sebastián Keitel (Evópoli) opina que le parece positivo "avanzar en un mayor control para evitar la elusión y evasión, al igual que la reducción de algunas exenciones".

En la misma línea están los Demócratas **Ximena Rincón** -"obviamente son temas claves"- y **Matías Walker**.

Royalty y litio

Existen matices eso sí para apoyar el proyecto de royalty minero. "Está en la Comisión de Hacienda y esperamos construir con el Ejecutivo un acuerdo que recaude más, pero que también incentive la inversión minera y el desarrollo tecnológico. La Comisión de Minería del Senado entregó un trabajo muy avanzado, sin acuerdo unánime, pero con grandes posibilidades de construirlo", dice **García** (RN), miembro de la Comisión de Hacienda.

Prohens afirma que el gran ganador del rechazo ayer a la reforma tributaria en la Cámara es el ministro Marcel, "porque tiene la oportunidad de decirle al Gobierno que la forma de recaudar es a través de la inversión y dar luz verde a proyectos que le permitirán al Estado más caja fiscal sin afectar el bolsillo de las familias chilenas y pymes". Y apunta a que "con el proyecto de royalty y de explotación del litio, se pueden financiar sus promesas sociales". Saca cuentas: según las cifras del Banco Central, SQM en enero pagó US\$1.150 millones y si eso se proyecta a diciembre de este año "el Estado puede llegar a recaudar US\$10 mil millones, un 50% más que el año pasado".



Ximena Rincón (Demócratas).



Gustavo Sanhueza (UDI).

Sebastián Keitel (Evópoli).



Rafael Prohens (RN).

En una línea similar, **Juan Castro** (RN) asegura que el Gobierno tiene otros mecanismos inmediatos para aumentar la recaudación. "Uno de ellos es iniciar las licitaciones para explotar litio, que el Gobierno puede de la forma que mejor les parezca, pero no dejando que Chile se quede en los últimos puestos de una industria que dentro de unos años quizás no sea tan rentable".

Se suma el senador **José Durana** (UDI), quien le pide al Ejecutivo poner el pie en el acelerador. "Chile posee inmensas reservas de litio, no obstante, la falta de decisión política en permitir una mayor participación de privados en su explotación o en desarrollar una política pública atenta contra los niveles de explotación de este mineral en nuestro país".

Sanhueza, su compañero de partido, plantea que el proyecto de royalty debe considerar, ante todo, los efectos que tendría aumentar los impuestos para la inversión extranjera minera en Chile así como en las empresas que ya están explotando yacimientos, porque podría hacerlas menos competitivas en el mercado internacional.

OCDE insiste en que Chile necesita elevar recaudación vía impuestos personales

El rechazo de la Cámara de Diputados a la reforma tributaria no varió la opinión de la OCDE respecto a apoyar al Gobierno chileno en su idea de que Chile necesita elevar su recaudación a través de impuestos que graven a los grupos más privilegiados. Adolfo Rodríguez Vargas, economista del organismo que agrupa a las economías más ricas del mundo, explica sus razones en esta entrevista vía e-mail:

"La OCDE comparte la posición del Gobierno de que Chile requiere aumentar su recaudación para atender inversiones en educación, salud, productividad e innovación. En 2021, los ingresos tributarios representaron solamente un 22% del PIB, significativamente por debajo del promedio de la OCDE (34%) y de América Latina. Si los ingresos adicionales se utilizan para financiar gastos que apoyen el crecimiento y la igualdad de oportunidades, el efecto general de la reforma sería favorable, aún considerando posibles distorsiones generadas por aumentar algunos impuestos".

-¿Es recomendable elevar el impuesto a las personas?

-Dado que en Chile hay fuertes desigualdades en el ingreso, es razonable argumentar en favor de cobrar más impuestos a los ingresos más altos. Chile es el segundo país más

desigual de la OCDE, de acuerdo con el índice de Gini después de impuestos y transferencias. La reforma propuesta acercaría la recaudación de Chile al promedio OCDE.

-¿Considera eficiente aplicar un impuesto al patrimonio?

-En Chile, los ingresos altos han tributado relativamente poco en el pasado, en parte como resultado de una amplia lista de exenciones tributarias y de baja imposición a los ingresos por capital. En principio, un impuesto a la riqueza es una forma de corregir parcialmente esta situación.

-¿Cuál ha sido la experiencia de países de la OCDE con el impuesto al patrimonio?

-La experiencia de otros países de la OCDE apunta a las dificultades en la valoración de activos y el riesgo de fuga de capitales, que pueden limitar sus ingresos potenciales. Un diseño deficiente y métodos de valoración inapropiados podrían limitar los potenciales ingresos. Las autoridades han anticipado acertadamente estos desafíos, y plantean hacerles frente con un método de valoración simplificado, y las proyecciones de ingresos consideran una reducción de la base imponible de 6% por cada punto porcentual del impuesto a la riqueza.



Adolfo Rodríguez Vargas, economista de la OCDE